

Perú: opción frente a la crisis

Carlos Furche

Es evidente que la situación del Perú es altamente explosiva, con numerosos indicadores que muestran una tendencia a la agudización del conflicto, lo que sin duda debe ser materia de preocupación por motivos de solidaridad democrática.

Usualmente se conocen las cifras indicadoras del desastroso comportamiento de la economía, expresado en caída del pgb, hiperinflación e imposibilidad de manejar la carga proveniente del endeudamiento externo. Junto a lo anterior, se destacan las cifras y características de la violencia política, que en los últimos ocho años ha provocado más de quince mil víctimas fatales.

Por lo general, se atribuye sin mayor cuestionamiento toda la responsabilidad de la crisis al gobierno de Alan García, crítica que se hace extensiva a los sectores de izquierda, aduciendo que en realidad el APRA ha gobernado aplicando un programa socialista. De esta manera, se rehuye la responsabilidad histórica de los grupos dominantes, se legitima una opción neoliberal como la que encarna Mario Vargas Llosa y se omiten algunos datos claves de la crisis política y de sus perspectivas de desarrollo.

En efecto, en materia de desarrollo económico y social, es inocultable el hecho que durante la última década, incluyendo por tanto el segundo gobierno de Belaunde Terry, principal promotor de la candidatura de Vargas Llosa, la situación de los sectores más pobres de la población se ha agravado, profundizando las tendencias a la concentración del ingreso, expresada en la caída de los salarios y la disminución del consumo de los sectores populares; y como contrapartida, en el incremento de la participación en el ingreso nacional de los grupos más pudientes, lo que acentuó la secular marginación de los campesinos indígenas de la sierra andina.

Por cierto, lo anterior en ningún caso implica desconocer la enorme responsabilidad del gobierno aprista, caracterizado por una conducta errática con connotaciones populistas, más fundadas en intereses partidarios de corto plazo que en un proyecto nacional. Sin embargo, ayuda a comprender que la violencia política, con todos sus componentes de crueldad e incluso de irracionalidad tiene referentes en situaciones históricas concretas, que se han incubado durante décadas, y en lo cual

los sectores conservadores tienen la mayor responsabilidad.

Blanco predilecto

Un dato adicional, casi excluido de toda consideración, es que paralelamente a la presencia del grupo Sendero Luminoso, seguramente la organización guerrillera más hermética surgida en América Latina, existe un significativo movimiento popular organizado, que abarca a los sectores campesinos, obreros, pobres de las ciudades y sectores medios, de larga tradición y capacidad reivindicativa, que es un dato real en la evolución de la situación peruana. Por otro lado, a pesar de sus divisiones y divergencias, existe una izquierda integrada al sistema político, que tiene estrechos lazos con el mundo social, que se expresa nacionalmente y que en más de una ocasión se ha perfilado como opción de poder.

Paradójicamente, no se conoce el hecho que son precisamente estos sectores sociales y políticos los que sufren con mayor rigor los embates de la violencia, pues constituyen blanco predilecto de los ataques de Sendero Luminoso, que los ven como expresiones de

revisiónismo de izquierda; y que igualmente padecen los efectos de la represión militar indiscriminada, que los percibe como elementos subversivos, que otorgan espacio y soporte a la actividad guerrillera.

Eje en el movimiento popular

Puestas así las cosas, con un país en profunda crisis económica y social, con una parte sustancial de la población marginada por prejuicios étnicos, y con el desarrollo de Sendero Luminoso, las hipótesis de evolución del conflicto no pueden ser optimistas.

En efecto, a estas alturas están planteadas dos opciones dentro del sistema político. Una es la propuesta por Vargas Llosa, que supone un drástico reordenamiento de la economía en base a las concepciones conocidas de tipo neoliberal, con una fuerte carga ideológica antiizquierdista, y que más allá de los cuestionamientos de tipo ideológico que se le pueden formular, plantea el tema de su viabilidad en un país tan polarizado socialmente; de tal forma que, de no contar con un abrumador consenso, sin duda incrementará la espiral de violencia, en la medida

en que se agravará el contexto que le da origen.

Por otra parte, una opción que ponga su eje en el movimiento popular requiere también de condiciones de unidad política y programática que están muy distantes de obtenerse en este momento al interior de la izquierda peruana, conflictuada por la necesidad de renovarse abandonando viejos paradigmas y al mismo tiempo responder a las demandas de transformación de una sociedad que no permite espacio a los sectores que busca representar; y que en consecuencia le son disputados, por la vía de la seducción política e ideológica, a veces, y por el terror descarnado, otras, por parte de Sendero Luminoso y demás grupos guerrilleros.

Capacidad potencial de legitimidad

Los escenarios de enfrentamiento y resolución del conflicto fuera del sistema político son también claros, así como los actores que trabajan por imponerlos. Responden por una parte a la preparación de condiciones para una nueva intervención militar, que sólo puede ser de ultraderecha y estaría marcada por una enorme brutalidad, extensiva al conjunto de los sectores democráticos; y por otra, a la ampliación de un conflicto armado, que tendría como actores principales al ejército y a los grupos guerrilleros, frente a los cuales el movimiento popular sería su primera víctima.

De aquí la responsabilidad que

cabe, de manera especial, a los sectores políticos que defienden una opción de profunda transformación social y compromiso democrático, y que se encuentran en este momento dentro de Izquierda Unida y Acuerdo Socialista, pues probablemente constituyen la única opción de enfrentar la violencia desde una óptica social y política, y no sólo militar; y al mismo tiempo aparecen como los únicos con capacidad potencial de obtener legitimidad para reordenar la economía y sacarla de la crisis, sobre la base de propuestas fundadas en criterios de equidad, que no impliquen el agravamiento de la situación de los sectores populares, para lo cual no hay soporte ético ni espacio político. (X)

